

Carta Semanal n.º 438

del Comité Central del POSI - Del 16 al 22 de septiembre de 2013

COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 78:

La IV Internacional ha celebrado su VIII Congreso Mundial

¿Van a negociar los dirigentes de UGT y CCOO una nueva rebaja de las pensiones?

Como señalábamos en la anterior *Carta Semanal*, la debilidad del Gobierno le impide llevar a cabo de inmediato el recorte de pensiones que recomendaba la “Comisión de Expertos” nombrada por el Gobierno y en la que la mayoría abrumadora de los miembros eran representantes de la banca o las aseguradoras, de los fondos de pensiones privados.

Y, sin embargo, la Unión Europea y la Troika exigen que se recorten ya las pensiones. El Gobierno, que comparte esa decisión, es consciente de que, para poder hacerlo, necesita neutralizar la posible oposición de los sindicatos mediante un acuerdo explícito o un acuerdo tácito y por eso ha decidido aplicar a plazos las recomendaciones de los “expertos”, y abrir unas supuestas mesas de “diálogo social”, que permitan asociar a los dirigentes de UGT y CCOO a la nueva reforma de las pensiones.

El Gobierno se apoya en los pactos anteriores

Para implicar a los dirigentes en este nuevo recorte, el Gobierno puede apoyarse en dos “consensos” previos, el acuerdo de pensiones ASE, firmado el 2 de febrero de 2011 por los dirigentes de UGT y CCOO, y la aceptación por esos mismos dirigentes del marco del Pacto de Toledo, consenso establecido en abril de 1995 y que desde entonces ha propiciado varios recortes de pensiones.

Cuando se firmó el ASE, los dirigentes nos explicaron que era un acuerdo necesario para salvar las pensiones públicas. CCOO publicó una *Gaceta Sindical* especial bajo el título “Un acuerdo equilibrado para blindar las pensiones públicas”, en la que se decía que “gracias al Acuerdo de diálogo social se blindó el sistema público de reparto como único modelo de pensiones” y se añadía que “hasta el año 2027 la reforma no estará plenamente implantada, con lo que significa de modulación de los esfuerzos de los trabajadores en un periodo amplio de tiempo”.

El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Ramón Górriz, declaraba entonces que “para nosotros es muy importante haber blindado el sistema público de pensiones, que vaya a seguir existiendo es un elemento fundamental porque estaba anclado en el pacto de Toledo que corría serio peligro por la política del Gobierno y de la derecha, y ahora se garantiza más allá de 2040”.

Ahora, el proyecto de reforma de pensiones que ha presentado el Gobierno, para empezar a aplicar en enero de 2014, el documento titulado “El factor de sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social y el índice de revalorización de las pensiones”, comienza precisamente recordando cómo ese pacto introdujo el “factor de sostenibilidad de

las pensiones: “por medio de la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, se introdujeron en nuestro sistema de Seguridad Social diversas reformas de los parámetros configuradores de las prestaciones del mismo, afectando de modo especial al ámbito de la pensión de jubilación, a la vista de los recientes desafíos de índole demográfico y económico que se vienen observando en el entorno de los países de la Unión Europea”. Y en concreto cómo “el artículo 8 de la citada Ley 27/2011, de 1 de agosto añade una nueva disposición adicional (...), introduciendo en nuestro sistema la figura del factor de sostenibilidad”

Es decir, ¡el Gobierno se apoya en las condiciones pactadas por los dirigentes en el ASE para incumplir éste y tratar de forzar nuevas concesiones! ¿No sería necesario, para defender las pensiones, empezar por repudiar este nefasto acuerdo y retirar la firma del mismo?

Pero, el Gobierno, para amarrar al banco de los recortes a los dirigentes sindicales (y a los del Partido Socialista e Izquierda Unida), recurre también en su documento –al hablar del nuevo “índice de revalorización de las pensiones”– al otro consenso: “Además del Factor de Sostenibilidad, y para afrontar los retos de naturaleza económica a los que se enfrenta el sistema, dado el crecimiento continuado del gasto en pensiones que se produce, es preciso adecuar las reglas de indexación de las pensiones de manera acorde con la evolución de otras variables económicas. Esta modificación ya está prevista en las recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo (Recomendación 2ª) donde se plantea [y aquí comienza la cita del Pacto de Toledo] la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social ...”

De este modo, amarrados al ASE y al Pacto de Toledo, los dirigentes de UGT y CCOO se ven abocados a colaborar en los planes de recorte de pensiones.

¿Qué propone el Gobierno?

Las propuestas del Gobierno recogen, en lo esencial, las recomendaciones de los supuestos “expertos” pagados por la banca y las aseguradoras: poner en marcha dos mecanismos para rebajar las pensiones, el factor de sostenibilidad, que vincularía la pensión inicial a cobrar a la esperanza de vida de los pensionistas en el momento de la jubilación, y que empezaría a actuar a partir de 2019 (adelantándose 8 años a lo pactado en el ASE), y una nueva fórmula para la revisión anual de las pensiones, que sustituiría al IPC, y que tendría en cuenta las situaciones de las cuentas de

la Seguridad Social. Aplicando esta fórmula, las pensiones podrían subir anualmente entre el 0,25% y el IPC más 0,25%.

Con la propuesta del Gobierno, UGT calcula que las pensiones perderían un 20% de poder adquisitivo en los próximos diez años, mientras que Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, declara que en 15 años perderían entre el 14,5% y el 28,3%.

De acuerdo en acuerdo...

Cuando firmaron el ASE, los dirigentes de UGT y CCOO nos dijeron que las concesiones que habían hecho, garantizaban el futuro de las pensiones, “blindaban” el sistema de Seguridad Social. Que si no hubieran firmado, habríamos tenido una reforma peor. Los hechos demuestran otra cosa. El Gobierno se apoya en las concesiones hechas en el ASE y el Pacto de Toledo para imponer nuevos recortes. A este paso, de acuerdo en acuerdo, nos quedamos sin pensiones de jubilación o con unas pensiones de absoluta miseria.

Los responsables de UGT y CCOO han dicho que el Gobierno debe retirar su propuesta de cálculo de la actualización de las pensiones, pero no han dicho nada respecto del factor de sostenibilidad. Difícilmente podrían pedir al Gobierno que retirara una propuesta que ellos ya han aceptado al firmar el ASE (aunque fuera para 2027). Tampoco han dicho sí, a pesar de todo, van a seguir sentándose a negociar con el Gobierno si éste no retira su propuesta.

Y sin embargo, está claro que difícilmente podría el Gobierno hacer pasar un recorte tan brutal de las pensiones sin provocar un estallido social si los sindicatos no le facilitaran el camino. La Plataforma de Sindicalistas –a la que hacíamos referencia en la anterior *Carta Semanal*– organizó el pasado mes de junio delegaciones a las direcciones de UGT y CCOO. A esas delegaciones, los dirigentes de ambos sindicatos les manifestaron que no aceptarían ningún recorte más. Hay que continuar esa campaña. La defensa de las pensiones exige en este momento que los dirigentes de UGT y CCOO den un paso adelante y anuncien públicamente su negativa a negociar el recorte de pensiones que exige la Troika y propone el Gobierno, exijan la retirada inmediata de la propuesta y anuncien verdaderas movilizaciones, incluyendo una huelga general, si el Gobierno sigue adelante. Esa es la exigencia que hay que hacer llegar a los dirigentes desde cada centro de trabajo y de estudio, desde cada instancia sindical.

A lo que hay que añadir una reflexión que debe ser objeto del más amplio debate: defender el derecho a la jubilación exige hoy retirar la firma del ASE y el sometimiento de los sindicatos al consenso contra las pensiones del Pacto de Toledo

La movilización de la Diada catalana abre una crisis del Estado. ¿Cuál es el interés de los trabajadores y de los pueblos?

Desde el 11 de septiembre de 2012, la respuesta del Gobierno a las exigencias del pueblo catalán han sido las provocaciones y hacerse el sordo. Frente a ello, este 11 de septiembre, un millón de catalanes ha salido a las carreteras a reafirmar que quieren decidir como pueblo cómo defenderse.

Hay que recordar que esta reiterada explosión se ha producido después de varios años de grandes movilizaciones contra los recortes que no encontraron cauce alguno en las instituciones del régimen monárquico, en el Estado de las Autonomías sometido a las imposiciones de la Troika.

En ese aspecto, el impulso de las masas catalanas responde al mismo problema que las movilizaciones por la sanidad, la enseñanza o los servicios públicos en el resto del Estado, que desde hace varios años son ignoradas por las instituciones del régimen monárquico, servil ante Bruselas, despótico contra la población. Sin ir más lejos, el gobierno Rajoy y los gobiernos autonómicos, las Cortes y los parlamentillos subsidiarios están preparando unos presupuestos para 2014 que agravan los recortes a los servicios públicos y el hundimiento económico.

Con su movilización multitudinaria, sectores crecientes del pueblo catalán han decidido romper la baraja, levantarse contra esa falsa democracia, reivindicar el ejercicio de la soberanía, para poder sobrevivir y recuperarse.

Su determinación es de hecho una invitación a los trabajadores y pueblos del Estado español a romper el bloqueo de sus grandes movilizaciones de los últimos años por la política de los dirigentes de buscar acuerdos con Rajoy y dejar pasar las imposiciones de la Troika. Es de hecho una llamada a la movilización de trabajadores y pueblos para acabar con la Monarquía y enfrentarse como pueblos soberanos a la Unión Europea y el FMI.

El día 11, Interior permitía que una banda franquista atacase un acto del gobierno catalán en Madrid. El 12, el editorial de ABC exigía aplastar a los "sediciosos catalanes". El 14, Rajoy respondía a una carta del gobierno catalán que le planteaba la exigencia popular de celebrar un referéndum en Cataluña sobre la separación. El Presidente del Gobierno escribe, pero no contesta. Rajoy es un mero representante del aparato de Estado opresor, de la España cárcel de pueblos, del aparato de Estado que viene directamente de la dictadura y está al servicio de la oligar-

quía de los bancos, las eléctricas y las constructoras, y de las multinacionales.

Ese gobierno, y los anteriores se llenan la boca de la "unidad de España", pero cada vez que destruyen empleo, recortan las pensiones, los derechos, ponen una carga de dinamita en las bases económicas y sociales de la unidad de los trabajadores y de la fraternidad entre los pueblos (lo que hace más grave aún el que los dirigentes del movimiento obrero bloquen la movilización obrera).

La política "de reducción del déficit", al asfixiar a todos los pueblos y todas las capas populares agrava y resalta las desigualdades y agravios fomentados por el Estado de las Autonomías. "Nos roban", "tenemos menos servicios públicos que otros", dicen en Cataluña. "Tenemos derecho a superar el atraso y abandono secular de nuestra región", dicen otros. Todos tienen razón. Los gobernantes echan a otros pueblos la culpa de sus recortes. En realidad, el Gobierno saquea a todos los pueblos para pagar a los banqueros una deuda trampa y mantener un aparato de Estado parasitario. Si se rompe ese yugo, se corta el saqueo y se establece un régimen democrático, la libre colaboración entre los pueblos puede resolver fácilmente todos esos problemas.

Rajoy dice que el pueblo catalán debe respetar la Constitución. Pero en 2011, en quince días, para complacer a la UE, Zapatero y Rajoy cambiaron la Constitución en beneficio de los bancos.

Pero Rajoy, que sirve al aparato de Estado, ofrece "diálogo" y no responde sobre el referéndum: es un diálogo de sordos, como el de la ministra Báñez ante los sindicatos que exigen que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones.

La movilización de Cataluña ha abierto una crisis mayúscula en el Estado

Los trabajadores tienen mucho interés en que esta crisis del Estado se resuelva a favor de la democracia y la fraternidad entre pueblos.

Los partidos y sindicatos de los trabajadores, que defendieron unidos contra Franco el derecho de autodeterminación de los pueblos, tienen una responsabilidad fundamental. No podemos resignarnos a que se desentiendan o colaboren con los gobiernos, cuando necesitamos volcar todo su peso en defensa de los derechos del pueblo catalán, única forma de reforzar la unidad de los

trabajadores y favorecer la alianza de trabajadores y pueblos.

¿Se puede aceptar que el PSOE, IU y el conjunto de fuerzas del movimiento obrero, no estén exigiendo enérgicamente al Gobierno que deje de amenazar y provocar, negocie con los representantes elegidos por el pueblo de Cataluña y facilite un referéndum de autodeterminación?

Es inadmisibles que Rubalcaba hable de un retoque federal de la Constitución... y se permita ignorar desde hace un año el clamor inequívoco del pueblo de Cataluña. El Partido Socialista, que se levantó en Cataluña con la bandera del derecho de autodeterminación, ¿cómo puede convertirse en un adlátere de Rajoy cuando más falta hace que ayude a aglutinar a trabajadores y pueblos por la democracia y los derechos sociales?

Si los dirigentes políticos y sindicales del movimiento obrero dejan el protagonismo a las derechas, si cada responsable se limita a alinearse con Rajoy o con Mas, éstos nos pueden llevar a los peores enfrentamientos rompiendo la unidad de los trabajadores y de cada una de sus organizaciones.

Para empezar, no habría recuperación del empleo y los derechos sociales, sino el hundimiento cada vez mayor del empleo, los salarios, pensiones, sanidad, enseñanza, como reclaman un día sí y otro también el FMI y Bruselas. Ni Rajoy ni Mas, que nos venden cada día a esas instituciones del capital, pueden hablarnos de recuperación.

En todo el movimiento obrero, hay dos exigencias urgentes y fundamentales:

✓ El pueblo catalán ha de poder pronunciarse libremente sin demora ni falsificación, sobre cómo quiere organizarse y relacionarse.

✓ Hay que levantar la movilización unida más contundente de trabajadores y pueblos contra la reforma de pensiones, por la recuperación de convenios y derechos, por el fin de la "austeridad" y el no pago de la deuda.

El POSI entiende que es urgente agrupar fuerzas de trabajadores y jóvenes para luchar por la unidad en torno a esas dos exigencias rompiendo la resistencia de los dirigentes que no se despegan del Estado de las Autonomías ni siquiera cuando éste se desploma amenazando con aplastar los derechos y las organizaciones. No conocemos mejor medio que aglutinar energías en torno al llamamiento de sindicalistas y militantes obreros de Cataluña a los de todos los pueblos del Estado español.



Recibe esta carta semanal en tu correo electrónico

Te invitamos a que la recibas cada semana. Puedes apuntarte:

- Enviando un correo electrónico a inforposi@gmail.com
- En nuestra Web: <http://cartas.posicuarta.org>



POSI

Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección en España de la IV Internacional

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
<http://www.posicuarta.org>
Búscanos en Twitter: @posicuarta